



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Facultad de Ciencias Sociales
Carrera de Relaciones Internacionales

TESIS DE LICENCIATURA
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

**“El narcotráfico y la política colombiana: relaciones
establecidas entre los años 1970 y 2000”**

AUTORA: GOLDFELD, JENNIFER DANIELA

TUTORA: LIC. FUNES, FÁTIMA

BUENOS AIRES, JUNIO DE 2019

INTRODUCCIÓN.....	3
1. PODER POLÍTICO Y CRIMINALIDAD.....	4
1.1. ENFOQUE CRIMINOLÓGICO DEL PODER POLÍTICO.....	4
2. POLÍTICA CRIMINAL.....	11
2.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL.....	11
2.2. FUNCIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL.....	20
2.3. DISCIPLINAS CONEXAS A LA POLÍTICA CRIMINAL:.....	23
2.3.1. <i>Criminología y política criminal.</i>	23
2.3.2. <i>Criminalística y política criminal.</i>	24
2.3.3. <i>Sociología y política criminal.</i>	26
3. ESTADO, CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA.....	27
3.1. ECONOMÍA, CORRUPCIÓN Y REGIONALISMO.....	27
4. EL NARCOTRÁFICO.....	32
4.1. POLÍTICA CRIMINAL Y DROGAS.....	35
4.2. NARCOTRÁFICO: ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS Y ECONÓMICOS.....	37
4.2.1. <i>El negocio del narcotráfico.</i>	40
4.3. EL NARCOTRÁFICO EN EL ÁMBITO NACIONAL.....	42
4.4. INTERNACIONALIZACIÓN DEL NARCOTRÁFICO: POLÍTICAS CRIMINALES APLICADAS.....	44
4.4.1. <i>Relaciones internacionales en el narcotráfico.</i>	46
5. EL NARCOTRÁFICO Y EL PODER POLÍTICO.....	48
5.1. LA “NARCOPOLÍTICA”.....	50
5.2. TRÁFICO DE INFLUENCIAS, CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO.....	54
5.3. LA HIPOCRESÍA ORGANIZADA DE KRASNER.....	55
6. LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.....	57
6.1. EL NARCOTRÁFICO EN EL CONTINENTE AMERICANO.....	60
6.2. INTEGRACIÓN REGIONAL Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.....	64
6.2.1. <i>México y la lucha contra el narcotráfico.</i>	65
6.2.2. <i>El caso Colombia: consecuencias socioculturales del narcotráfico.</i>	70
6.2.3. <i>La narco-guerrilla: el narcoterrorismo como factor de desestabilización social.</i> .	73
6.2.4. <i>El cartel de Medellín: principales actores.</i>	77
6.2.5. <i>Influencia del narcotráfico en el poder político colombiano (1970-2000).</i>	79
6.2.6. <i>Integración económica y bilateralidad en la lucha del narcotráfico colombiano: Estados Unidos y el “Plan Colombia”.</i>	82
CONCLUSIÓN.....	86
BIBLIOGRAFÍA.....	87

INTRODUCCIÓN

El narcotráfico es una de las actividades ilícitas que mayor problema ha generado tanto a la comunidad internacional como a los ordenamientos internos. En este sentido, se han consumado incansables esfuerzos por contener sus nocivas consecuencias, mismas que degeneran y descomponen progresivamente el tejido social. Ahora bien, la premisa que funda la necesidad de instrucción sobre la presente investigación académica, reside en una de las realidades que se torna como uno de los fenómenos más complejos asociados al narcotráfico, se hace alusión -pues- a la relación entre esta última actividad (que será sucesivamente definida y caracterizada), y el control político.

En consideración de lo antes dicho, se tiene que -precisamente- la promiscua relación existente entre el ejercicio del poder político, y el narcotráfico, representan una combinación muy peligrosa para los intereses geopolíticos de la región. Es, en atención a dicha premisa, que se constata la necesidad imperante de abordar el tema relativo al "Narcotráfico y la política en Colombia". Ello, puesto que la nación mencionada, ha sido uno de los países que más ha sufrido las consecuencias del desmesurado crecimiento de la actividad ilícita referida.

Así, se generan varios cuestionamientos que serán determinantes, a los efectos de la íntegra consecución del presente trabajo: ¿Cuál es la visión que tiene la política criminal de dicho problema? ¿Cómo incide el trinomio entre estado, corrupción y delincuencia organizada en el tema del narcotráfico? ¿Cómo ha sido progresivamente globalizada la atención del problema del narcotráfico, partiendo de sus raíces en la nación neogranadina? ¿Cuáles son las principales estrategias que se han suscitado para el combate contra el narcotráfico? ¿A qué se alude con *narcopolítica*? Y, por último ¿Cómo se maneja el movimiento integracionista latinoamericano, respecto del comentado fenómeno?

En síntesis, pues, se determina la obligación de estudiar los límites o las fronteras que circundan las relaciones del poder político gubernamental y los principales actores y precursores del narcotráfico en la República de Colombia, durante un periodo de tiempo comprendido entre el año 1970 y el 2000. Para lograr dicho cometido, será necesario todo un complejo y minucioso análisis sobre los aspectos más fundamentales del narcotráfico en su teoría: qué es; cómo se caracteriza; cuáles son sus principales elementos; cómo ha sido la política internacional y nacional (colombiana y mexicana, fundamentalmente) diseñada para

contener su influencia y corrupción implícita, entre otras cuestiones sucesivamente desarrolladas. Además, corresponderá mencionar la incidencia de la irregular distribución geográfica como un factor que contribuye al surgimiento de movimientos que, si bien no han nacido con el único propósito de contrabandear drogas, se han aprovechado de ello para sus últimos fines, como es el caso de la FARC.

En esencia, se requiere el análisis de la evolución del narcotráfico colombiano, con el firme propósito de identificar el preciso momento en el cual, dicha actividad irrumpe de forma contundente en el desenvolvimiento y ejercicio del poder político de tal nación. Asimismo, y como consecuencia del anterior objetivo, serán estudiadas las principales estructuras criminales dedicadas al narcotráfico (el cartel de Medellín y de Cali, en el caso colombiano; y, el cartel de los zetas y el cartel de Juárez, en el caso mexicano).

En este último punto, será fundamental la ponderación de las dinámicas y de las respuestas que el gobierno colombiano -y demás representaciones gubernamentales latinoamericanas- proporcionaron durante el periodo de tiempo indicado (inclusive en etapas posteriores), respecto del combate contra el narcotráfico. Ello, claro está observado en su relación con la política criminal de cada Estado, así como desde una perspectiva internacionalista, donde sea posible apreciar el valor que añade a la presente investigación, el movimiento de integracionismo regional destinado a brindar efectivas respuestas para contener el narcotráfico y su amenaza hemisférica.

1. PODER POLÍTICO Y CRIMINALIDAD.

1.1. ENFOQUE CRIMINOLÓGICO DEL PODER POLÍTICO.

Conviene dejar precisado lo que se ha de comprender como criminología entendiéndola, como aquella ciencia social que se encarga de analizar al derecho penal en su relación inminente con la esfera social; ello nos con lleva por supuesto a hacer mención a la criminalidad, como hecho social de habituación del delito, es decir la criminalidad hace referencia a la recurrencia del delito (Espinoza, 2007).

El poder político, que es el impulsor del aparato Estatal; goza pues quien ejerce de tal poder, de privilegios estatales y no estatales; los primeros devienen de los privilegios que otorga la ley y; los segundos devienen de facto del ejercicio de su poder, unos porque ellos mismo así han de atribuírselos y otros porque el mismo entorno así se los atribuye. Entre tantos privilegios facticos podemos hacer referencia al hecho en que ostenta de alta posición

social que les permite tener acceso a todo tipo de individuos, con los que pudiera tener relación interpersonales o simplemente de negocios y por otro lado ostentan un grado considerable de privacidad en sus relaciones y por ende un alto respeto a su integridad por ser individuos en ejercicio del poder político (Espinoza, 2007).

Cabe destacar que, parece ser que hay un poder mayor al poder político, y tiende a ser el poder económico, y quien tiene poder económico es quien tiene mayores riquezas, y por tanto eso le permite posicionarse con mayor poder y mayor dominio. Ello indudablemente viene a ser sumamente atractivo para quien ejerce el poder político o para quien aspira ejercerlo y pretende incursionar en el campo de lucha pacífica por el poder. Por lo tanto, vale decir que para quien se mueve como actor político, sabe la suprema necesidad de contar con alto potencial económico, y pareciera que mientras más riquezas se tiene para mantener su cúpula y para garantizar las regalías y dadas a sus seguidores, mayores son las posibilidades de mantenerse en el poder.

Por lo tanto, esas ansias de obtener el poder y no de permanecerse en él, conlleva definitivamente a diversos medios para mantener un alto potencial económico; de ello que interese hablar de la criminalidad en el poder político. Este asunto no solo es contemporáneo a nuestros tiempos, sino que deviene de décadas atrás, de allí que surta necesario hacer un pequeño recorrido de casos emblemáticos en Colombia, tales como lo que sucedió previo a los comicios electorales de 1984 donde correspondía elegir a los miembros de las asambleas departamentales y de los concejos municipales (Espinoza, 2007).

Asimismo, Rodrigo Lara entonces Ministro en esa época, dirigió un escrito privado a quienes dirigían los partidos liberal y conservador, donde les precisaba de que él estaba en conocimiento, que en los inscritos por tales partidos para las elecciones, había candidatos que se dedicaban al narcotráfico. Sin embargo, no se pudo estar en conocimiento del contenido exacto de tales escritos, pero sí se pudo saber que quienes figuraban como narcotraficantes aparecían inscritos para los departamentos Antioquía, Magdalena, Guajira y Cesar (Espinoza, 2007).

Aunado a ello, es necesario destacar que Diego Ascencio, quien era el embajador de los Estados Unidos en Bogotá, ya para el año de 1978 había advertido de manera pública que los narcotraficantes (colombianos) son tan fuertes, en términos de poder financiero que podrían tener su propio partido y pueden ya haber comprado y pagado diez miembros del congreso legislativo. De esta manera, se visualiza de ese modo, como no era ya un hecho

sorpresivo, ya estaba en conocimiento de la opinión pública que la criminalidad estaba abordando el campo del poder político, si bien en ambos casos antes mencionados se ha de referir específicamente al narcotráfico, es bien sabido que es el delito principal que acarrea la consumación de diversos delitos para llevar a cabo, tal actividad delictiva.

Es importante mencionar que, en el año de 1986 cuando correspondía que se celebraran los comicios electorales del Congreso, Enrique Parejo haciendo uso de sus facultades como Ministro, advirtió a la opinión pública, que las campañas de cierto aspirantes al congreso por los departamentos Bolívar, Caquetá, Antioquia, Atlántico, Guajira, y de la comisaría de Amazonas, contaban con dinero que provenía de narcotraficantes (Espinoza, 2007).

Es preocupante que para la sociedad colombiana en general, no hubo mayor preocupación ante tales eventos; hoy por hoy se ha llegado a aseverar que en el congreso colombiano más de una decena de sus integrantes tiene algún vínculo con el tráfico de drogas y otro número semejante de congresistas están siendo financiados con dinero proveniente del narcotráfico. Son altas sumas de dinero, lo que se paga por llegar a la lista de candidatos a comicios electorales y por permanecer en ellos. Esto permite visualizar un país donde la política se moviliza en el campo de lo económico y no de los ideales (Castillo, 1987).

Uno de los primeros casos que fueron públicos, en los que se evidenciaba la relación de políticos con el narcotráfico, aconteció a finales del mes de enero de 1976, fecha en la que fue arrestado Jairo Montoya Escobar, quien ostentaba el cargo de Diputado liberal por el departamento de Risalda, fue capturado en flagrancia negociando para vender 30 kilos de droga que había traslado desde Pereira. Con las investigaciones realizadas, se pudo evidenciar que dicho Diputado estaba trabajando con el narcotraficante Hernando Jiménez Panesso.

Actualmente en el campo del quehacer político, se presencia congresistas de los diversos partidos que tienen alto grado de altruismo y su principal bandera es la defensa de los derechos sociales, pero estos congresistas son casos muy específicos. Es preciso observar casos, tales como el de Pablo Escobar y Jairo Ortega en el departamento de Antioquia, los cuales fueron miembros del partido Nuevo Liberalismo, de donde públicamente les expulsaron. Posteriormente, formaron parte del movimiento Alternativa Liberal, que estaba dirigido por el miembro del Senado, Alberto Santofimio Botero (Castillo, 1987).

Dentro de este movimiento, Pablo Escobar tenía como una bandera ecológica; crearon una lista en el cual Jairo Ortega, quien era Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, incluyó a quienes llegaron a ser rectores de tal universidad como lo fueron, Orion Alvarez quien era candidato al Senado así como también Iván Gómez Osorio candidato al Concejo. A pesar de tratarse de un movimiento muy reciente, obtuvieron una votación considerable, ello encontraba justificación en motivos como: Pablo Escobar dedicó su campaña política en solucionar de manera pronta y eficiente problemas tanto en Medellín como en otros municipios circunvecinos (Espinoza, 2007).

Tales como, iluminación de los espacios deportivos de los sectores populares de Medellín, creación de espacios deportivos (canchas de futbol) en municipios de Antioquia. Además de ello, realizaba fiestas los fines de semana donde daba dinero y arbustos a los asistentes; así como también estaban dadas las posibilidades de formar parte de su movimiento (Castillo, 1987).

Posteriormente, al momento de las elecciones Ortega gana el curul, y quedó Escobar Gaviria como su suplente; con ella obtiene privilegios políticos ambos, lo que le permite a Escobar ostentar la inmunidad parlamentaria; entre tales privilegios a Escobar se le concedió un visa privilegiada, que fue solicitada por la cancillería colombiana. No conforme con ello, también en la lista iba incluida una hermana de Escobar Gaviria, quien incluso se vio involucrada en dos asesinatos muy sonados, como los de Rodrigo Lara y el de un político del municipio La Estrella (Castillo, 1987).

Es importante mencionar que, lo que sucedió con Carlos Ledher Rivas al impulsar el Movimiento Latino Nacional en el departamento de Armenia, era que funcionaba con actividades como el "sábado patriótico" donde quienes más tenían dinero y propiedades, daban a los más desprovistos dinero, comidas, refrigerios. Todo ello lo hacían ante un discurso en el que se declaraban contra los Estados Unidos, a favor de una moneda única para los países latinos, así como apoyaban la tenencia de una dosis de marihuana para el consumo personal, de igual modo en sus ideales se marcaba estrechamente, una lucha con la extradición. Al momento de que se realizasen los comicios electorales de 1984 para elegir a los miembros de las Asambleas y Concejos, lograron puestos para la Asamblea de Quindío y en los Concejos de Armenia y La Tebaida.

Luego de ello, cuando estaban a punto de lograr el exilio, buscando evitar que los extraditaran, a su movimiento finalmente le denominan Movimiento Latino Socialista,

contaban con una prensa escrita propia, llamado "Quindío Libre", el cual tenía destinada la primera página, para asuntos específicos como publicar noticias que desmeritaran y desacreditaran a Rodrigo Lara y a la vez realzar y difundir los ideales de Alberto Santofimio (Espinoza, 2007).

En este sentido, tratándose del caso de Severo Escobar y el Ospinismo; este hombre ingresa a las filas de Ospinismo, siendo pues que de la mano de estos alcanzó la diputación de Cundinamarca, así como también llegó a ser Secretario para el área agrícola de Cundinamarca. También, fue realzado su nombre al colocársele en el Palacio Echeverry una placa de bronce en su honor. En dicho lugar también era propietario de un restaurante llamado "El Mesón Azul"

Lo anterior expuesto no ha sido lo único que ha sucedido respecto de la criminalidad y el poder político en Colombia, pues también políticos como Eduardo Mestre Sarmiento, quien era integrante de la Dirección Liberal Nacional y ocupaba el cargo de senador por Santander, era a toda vez uno de los políticos con mayor realce en su partido, y a él le encontraron relacionado con un jefe del narcotráfico de nombre Gilberto Rodríguez Orejuela tanto en la Corporación Financiera de Boyacá como en el Banco de Trabajadores. Éste fue quien dio fe de la buena conducta para que el Ministerio de la Defensa admitiera como representante de la empresa a Miguel Rodríguez Orejuela (Espinoza, 2007).

Por su parte, Mestre Sarmiento como candidato a la presidencia quedó en el camino, pues sus aspiraciones fueron frustradas cuando las investigaciones realizadas por personal de El Espectador, en el que le dejaban en evidencia respecto de su relación con los Rodríguez. Entre los cuales aseveraba que a éste le había dado a través del Banco de los Trabajadores un crédito de diez millones de dólares, dinero que utilizó para convertirse en accionista de la Corporación Financiera de Boyacá; dicho crédito fue cancelado en otros por Rodríguez Orejuela.

En este mismo orden de ideas, se precisa que miembros del congreso por parte de los liberales en el Norte de Santander de nombre Jairo Siebi y Felix Salcedo Baldión, se les decomisaron 30 kilos de droga en un hotel de la ciudad capital de Venezuela, por lo que se emitió orden de captura en contra de ambos. Por su lado, Salcedo con ínfulas de superioridad en su territorio ha indicado en cierta oportunidad que, tal inconveniente en Venezuela fue resuelto; sin embargo en dicha nación siguen nombrando al congresista en mención vinculándole con el narcotráfico (Espinoza, 2007).